



INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “DIGITALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DE VALORACIÓN DE LOS CENTROS BASES DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA DISCAPACIDAD-AÑO 2025”

El Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, atribuye en su artículo 11 las siguientes competencias a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad:

1. El reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad discapacidad (en adelante Real Decreto 888/2022 de 18 octubre).

2. La emisión de dictámenes e informes necesarios para la tramitación de prestaciones y la prestación de servicios especializados de atención básica en materia de información, orientación e intervención terapéutica.

Los procedimientos anteriormente expuestos, a tenor del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, sobre el procedimiento para el reconocimiento, se regulan supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la que deben de adecuarse en lo que se refiere a la tramitación del expediente administrativo.

No obstante, esta última ley, exige y recoge una serie de consideraciones y de obligaciones para garantizar la implantación del expediente administrativo electrónico, que se está llevando a cabo de forma paulatina.

El sistema informático “Reconocimiento de Grado de Discapacidad” RGM, implementado por el Ente Público de Derecho Agencia Madrileña para la Administración Digital alberga los expedientes de valoración de la discapacidad de todos los usuarios de la Comunidad de Madrid.

Progresivamente, este aplicativo ha ido incluyendo las exigencias que, a través de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico y las leyes que le sucedieron, fueron estableciendo.

No obstante, para poder hacer realidad el expediente administrativo electrónico en su integridad, 100% en formato digital, resulta imprescindible proceder a la digitalización de los expedientes que total o parcialmente, están contenidos en formato papel, o mixtos (parcialmente en papel y parcialmente en electrónico).

Con dicho objeto, el pasado 13/12/2022 quedó adjudicado por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, el contrato de Servicios denominado “Digitalización y obtención de la copia auténtica certificada del expediente de valoración de los Centros Bases de discapacidad, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU” (nº expediente 023/2023 (ASER.021518/2022), a la entidad ILUNION CEE CONTACT CENTER, S.A., con NIF: A79331690, y cuya fecha de finalización, incluidas las posibles prórrogas, es el 31/12/2024.

Estando en la actualidad dicho contrato en fase de ejecución, revisada la evolución del mismo, y considerando el alto volumen de expedientes que aún quedan por preparar, identificar e inventariar por parte del personal técnico y administrativo de los centros bases para su posterior digitalización, y no

pudiéndose ya prorrogar el actual contrato, se hace necesario la redacción y elaboración de un nuevo contrato de servicios que dé continuidad y terminación al proceso de digitalización de la totalidad de los referidos expedientes.

La imputación presupuestaria del nuevo contrato se efectuará con cargo al **Programa 231C subconcepto 22709** de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2025; en su caso, para lo no ejecutado en el ejercicio anterior, en el 2026

En la actualidad, se ha calculado aproximativamente que el volumen de expedientes que parcial o totalmente seguirá estando en formato papel a fecha 31 de diciembre de 2024, fecha de finalización del contrato en vigor, será de aproximadamente 156.466,40 expedientes, con una dimensión de unas 53 páginas de media por expediente.

Esta labor de digitalización y copia auténtica, en la que no sólo se procede al escaneo de la documentación, sino a la elaboración de una copia auténtica, en los términos que establece el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

A mayor abundamiento, se ha de considerar que la certificación de la copia auténtica sólo puede ser emitida tras la elaboración del documento electrónico, con un sellado o firma digital que cumpla con los requisitos mínimos del ya referenciado Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Si consideramos desde el punto de vista práctico los trabajos a realizar, de escaneado, verificación y certificación, todas estas tareas resultan inapropiadas y no corresponden con las funciones que tienen atribuidas el personal al servicio de los centros bases. Asimismo, se requieren un tratamiento unificado e integral, con los medios profesionales, técnicos e informáticos que garanticen la autenticidad, la fiabilidad, la uniformidad y calidad del producto resultante. Todo ello, sólo puede obtenerse mediante un proyecto diferenciado y singularizado, con financiación y personal cualificado ad hoc.

Las actividades que en este contrato se relacionan, no guardan ninguna identidad con las tareas que tienen atribuidas el personal, ni tan siquiera administrativo, que se halla adscrito a los centros bases de la discapacidad ni a la subdirección general de valoración de la discapacidad y atención temprana. Máxime aún, el desarrollo de estos trabajos, a falta de equipamiento tecnológico básico de escaneo y verificación digital, no pueden ser realizados en las dependencias ni en las sedes de la Administración contratante, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Además, es claro que es un objetivo único y diferenciado, de carácter coyuntural y transitorio puesto que, una vez realizada la copia auténtica documental, se pretende que se interconecte o incluya en RGM, para que de esta forma pueda permitir a los profesionales tener en formato electrónico todos los expedientes anteriores, funcionando en su totalidad de forma digital desde la plena digitalización del expediente en papel.

Paralelamente, se está trabajando para obtener las autorizaciones pertinentes con el fin de remitir, conforme la Ley 4/1993 de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, los expedientes en formato papel al Archivo Central. De esta forma, quedará íntegramente implantado el expediente electrónico de la discapacidad.

De todo lo anterior, se deduce que el objeto del contrato de servicios está perfectamente deslindado de la actividad ordinaria que se desarrolla en los centros bases de discapacidad, no siendo posible su

asunción, por falta de cobertura legal, técnica y organizativa, por la plantilla adscrita a los mismos. Ello, sin perjuicio de que todo el personal adscrito al Área de Coordinación de los Centros Bases, de los propios centros bases, así como el que se concedido a través del programa de interinos del Mecanismo de Resiliencia, colabore activamente para la implementación, comprobación del resultado final satisfactorio.

Es más, de conformidad con el art. 308.2 de la LCSP, en ningún caso las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato podrán consolidarse o aspirar a ser reconocidos como personal propio del organismo contratante.

Madrid, a fecha del día de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fdo.: Alejandra Serrano Fernández

Firmado digitalmente por: ALEJANDRA SERRANO FERNÁNDEZ - ***6207**
Fecha: 2024.07.05 10:25